

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 34 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 15° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-9136-2021
CARATULADO	: GEORGE-NASCIMENTO/ESTADO DE CHILE -
FISCO	

Santiago, catorce de Julio de dos mil veintitrés

VISTOS:

Con fecha 17 de noviembre de 2021, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río 326, oficina 1104, Comuna de Santiago, en representación de doña Ximena George-Nascimento Lara, geógrafa, domiciliada en Samoa número siete mil seiscientos sesenta y siete, Comuna de La Reina e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas 1225, Cuarto piso, comuna y ciudad de Santiago.

Relata que la demandante, fue detenida el día 11 de Octubre de 1973, por Carabineros de la Escuela de Suboficiales de Ñuñoa, cuando alrededor de las 19.30 horas, llegó junto a su hijo de 5 años a su departamento, y se encontró en él con cuatro o cinco oficiales, encontrando su domicilio en total desorden, ya que estos habían registrado todo.

Indica que, junto a su hijo fueron conducidos en un furgón hacia la Escuela de Suboficiales de Carabineros de la comuna de Ñuñoa, y que en el camino le solicitó al capitán a cargo, pasar a dejar al niño a la casa de su padre, también en Ñuñoa, a lo que este accedió.

Señala que, en la Escuela de Suboficiales, se encontró con Héctor Martínez, miembro del Comité Central del Partido Socialista, el cual se encontraba ferozmente torturado y que su rostro era casi irreconocible, ya que lo habían arrojado a un hoyo, en el cual habían encontrado escondidas unas armas, lanzándole un chuzo que le hizo una profunda herida en un costado de su cuerpo.

Continúa su relato, indicando que la primera noche de la detención fue encerrada sola en una pieza, siendo interrogada sobre sus contactos y actividades, pero especialmente respecto de la ubicación de armas, bajo amenazas de sufrir fusilamiento y lo mismo que les estaban haciendo a los otros detenidos, esto es, cadenas y azotes, si no decía la verdad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFFXVK

«RIT»

Foja: 1

Comenta que, junto a otros compañeros, permanecieron unos tres días en ese lugar, sin comida, y que solo podían tomar agua al ir al baño, y que en lo personal, sufrió la humillación de tener que hacer sus necesidades y lavarse siendo observada por un carabinero.

Luego de eso, fueron trasladados al Estadio Nacional, lugar en el cual fue ubicada con el resto de las mujeres, donde estuvo hasta el traslado de los prisioneros en el mes de noviembre, periodo en el cual fue interrogada una vez de pie, de cara a la pared con los ojos vendados, siendo manoseada y golpeada.

Añade que, posteriormente, en noviembre se hizo un traslado masivo de las mujeres a la Casa Correccional de Mujeres, en la comuna de San Joaquín, lugar pequeño, con un número fluctuante de ellas, de variadas características socioculturales, desconocidas entre sí, y donde asegura había infiltradas, lo que tornaba muy estresante la situación, sumado al maltrato verbal humillante de algunas gendarmes y especialmente la agresividad de la monja Fresia encargada del patio en el que estaban, donde ejercían trabajos forzados ilegales, hasta que fueron visitadas por una delegación de Amnesty International, oportunidad en que el trabajo obligatorio terminó.

Detalla que en aquel lugar, se vivía en estrés y angustia permanente, no tenían atención médica, salvo por un urólogo, que iba cada 15 días a atender “casos urgentes”, y que la alimentación provista por la cárcel era deficiente, siendo las familias, quienes suplían en cantidad importante la dieta de las prisioneras.

Expone que su padre, en septiembre de 1974, contrató al abogado Nurielín Hermosilla para ocuparse de su caso, quien le comunicó que era parte de un grupo de prisioneros que había sido “llevado a Consejo de Guerra” el 13 de septiembre, respecto del cual, ella tenía total desconocimiento, y en el que se le había sobreseído temporalmente, lo que significaba que durante 5 años el caso podía ser reabierto si surgía nueva evidencia.

Agrega que, en la Casa Correccional de Mujeres estuvo detenida hasta el diez de octubre del año 1974, cuando fue dejada en libertad, siendo informada a los pocos días, por el Fiscal Rolando Melo, que se estaba tramitando un decreto de expulsión en su contra y que le recomendaba abandonar el país cuanto antes porque probablemente sería nuevamente detenida.

En cuanto al exilio que sufrió, señala que al final de octubre se fue a la Argentina, país en el que fue amenazada mediante un bombazo en la noche del 30 de noviembre de 1974, el cual fue arrojado al balcón interior del departamento en que residía con su hijo, por lo que debió salir urgentemente, viajando a Italia en diciembre 1974, donde estuvo un año y medio trabajando y estudiando.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

Arguye que, en junio de 1976 llegó a Inglaterra, tras obtener con una beca WUS para terminar sus estudios, lo cual le daba el estatus de refugiada por la Convención de Ginebra de 1951, y que permaneció en el Reino Unido durante 18 años hasta diciembre del 1992, país en el que estudió dos postgrados y trabajó.

Luego hace referencia a que, pese a que doña Ximena George-Nascimento Lara, logró sortear con vida los brutales actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad por parte de los agentes del Estado, más precisamente del Ejército, de Investigaciones y Carabineros, estos marcaron su vida y la de su familia, debiendo a aprender a convivir con una serie de problemas físicos y psicológicos que la han acompañado toda su vida.

Por estos anteriores motivos ha sido calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados con el número 9807, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040 del año 2003 del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech.

En cuanto al derecho, explica que los hechos relatados constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg confirmado por las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946 y de 11 de diciembre del mismo año, junto con la aprobación del Estatuto de Roma de 1998, y que estos crímenes intolerables para la humanidad, han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el caso de autos.

Como segundo fundamento, invoca la responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República de 1980, y particularmente en su artículo 38, que consagraría una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos, por su actividad, provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica, lo que se encontraría recogido en la jurisprudencia citada al efecto, y la correspondiente remisión al Capítulo I de la Constitución Política de la República de 1980, sobre las Bases de la Institucionalidad, como el inciso cuarto del artículo primero, junto al inciso segundo del artículo quinto, que resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización, centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano.

Agrega que el Estado de Chile, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien, mediante la vigencia de determinadas normas que se fundan en la costumbre internacional y los Principios generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas, según lo preceptuado por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ha adquirido de forma progresiva una serie de obligaciones internacionales, que tienen como marco la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados.

De lo anterior, se deriva que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente; no interesando la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado.

Por otra parte, indica que resulta improcedente aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, dado que se construyen bajo premisas y principios diferentes a los del derecho público y derecho internacional de los derechos humanos y están destinados a otras conductas e intereses. Al respecto, señala que cobran relevancia los artículos 27 y 28, ambos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que ha sido recogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por los tribunales nacionales según la jurisprudencia citada.

Con lo anterior, expone que el derecho de daños del Código Civil resulta insuficiente para resolver conflictos sobre violaciones a los derechos humanos; dado que no se trata de la reparación de un delito común, dado que en estos casos se trata de una práctica sistemática y masiva por parte del Estado destinada al exterminio de un número importante de la población, en razón de creencias e ideologías políticas, siendo insuficiente lo dispuesto por el artículo 2314 del Código Civil; y que las normas del Título XXXV del Libro IV de este Código fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del mal comportamiento y hábitos de las personas.

Invoca la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, dado que constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada. Lo anterior se encuentra recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrito y ratificado por Chile, aplicable en la especie en razón de lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2º, de la Constitución



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

Política de la República, señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana, que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Junto con la jurisprudencia emanada de las cortes internacionales, indica que resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano, dentro del sistema interamericano, trae aparejada la obligación de reparar el mal o daño que ha causado dicha violación, siendo la norma rectora en dichos casos el artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica. Esta obligación del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber, el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros.

Para respaldar lo anterior, cita 183 fallos emanados de la Excelentísima Corte Suprema en los que se habría reconocido la imprescriptibilidad de la acción, cuando ésta emana de un crimen de lesa humanidad y/o de un crimen de guerra, en tanto crímenes de derecho internacional, lo que denotaría un criterio jurisprudencial constante y consistente.

En cuanto al daño provocado y monto de la indemnización, señala que en este caso existe un daño moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que al demandante le ha tocado soportar, como víctima de crímenes de derecho internacional, que debe ser reparado mediante la indemnización. Invocando doctrina y jurisprudencia, señala que estas coinciden en que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado, cuestión que fluye del sentido común, puesto que una víctima de violaciones de sus derechos humanos ha sufrido un daño que debe ser reparado, en todas sus dimensiones.

Agrega que siendo difícil para el demandante proponer ante la Judicatura alguna cifra exacta, solicita se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$150.000.000.- para la demandante doña Ximena George-Nascimento Lara, a título de indemnización por el daño causado, como consecuencia directa de los hechos criminales perpetrados en su contra, por parte de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta Tribunal determine en justicia, reajustada a la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha de interposición de la demanda, junto con los intereses legales y costas de la causa.

Con fecha 8 de febrero de 2022 fue notificada la demanda al demandado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

Con fecha 24 de febrero de 2022, comparece el Fisco de Chile, debidamente representado, quien al contestar la demanda opone las excepciones perentorias de reparación integral o pago y excepción de prescripción extintiva, y solicita su total rechazo, con costas, conforme los siguientes fundamentos:

En cuanto a la excepción de reparación integral, la funda en la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el actor.

Argumenta que la reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos se ha realizado principalmente por medio de tres tipos de compensaciones, a saber: a) transferencias directas de dinero; b) asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, c) reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En lo que concierne a la primera modalidad, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos, la discusión radicaba entre quienes sostenían que debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras otros estimaban que a través de una pensión vitalicia.

Indica que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de pensiones la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); en concepto de bonos ha asignado la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley N°19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley N°19.992; en cuanto a desahucio (bono compensatorio), la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley N°19.123; y por Bono Extraordinario (Ley 20.874), la suma de \$23.388.490.737.- Consecuencia de lo anterior, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio; basta con sumar las cantidades pagadas a la fecha, más las mensualidades que todavía quedan por pagar.

En cuanto a las reparaciones específicas, señala que el actor ha recibido los beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones, la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

cual estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de Derechos Humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Agrega que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley N°20.874, por \$1.000.000.-

En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa, se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. Se concedieron, asimismo, beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Por último, en lo referente a las reparaciones simbólicas, señala que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Indica que este tipo de acciones pretende reparar tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral. A modo de ejemplo destaca la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y, la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DD.HH., tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

Concluye que de todo lo expresado hasta ahora existe una identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones ya realizadas, los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXGCFXVK

«RIT»

Foja: 1

esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica, tanto la indemnización solicitada en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser compensados nuevamente. Al respecto cita jurisprudencia nacional e internacional para indicar que la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que habrían inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que acompañaría en su oportunidad, que daría cuenta de la procedencia de la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

En segundo lugar, respecto a la excepción perentoria de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción.

Señala que según el relato efectuado por la actora, la detención ilegal y torturas que sufrió, ocurrió desde el día 11 de octubre de 1973 y hasta el 10 de octubre de 1974.

Sostiene que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de la notificación de la demanda, esto es el 8 de febrero de 2022, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332 del Código de Bello.

En subsidio, para el caso de que el Tribunal considere que la norma anterior no resulta aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil en relación al artículo 2514, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la demanda transcurrió con creces dicho plazo.

En dicho contexto, precisa que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Aclara que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solo ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Expone que el Pleno de la Excma. Corte Suprema dictó con fecha de 21 de enero de 2013 una sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y zanjó esta controversia señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva (considerando octavo).

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal (considerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo) .

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto (considerando décimo).

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de los demandantes), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los Tribunales de Justicia.

Solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis las argumentaciones hechas valer en este punto y la jurisprudencia posterior al citado fallo, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

en sentencia de fecha 21 de enero de 2013, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

De otro lado, señala que la indemnización de perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Por ello, la acción destinada a exigirla, como toda acción patrimonial, está expuesta a extinguirse por prescripción.

Precisa que, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia (citando al pie variedad de la misma), en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, y tal proceder no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue.

Finalmente, refiere en cuanto a las alegaciones del actor en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, precisa que ninguno de los instrumentos internacionales que detalla contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno de esta materia.

Así, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, corresponde aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En seguida, en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido de \$150.000.000.-

Hace presente en relación al daño moral que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

mismo, en consecuencia recae sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es directamente económico.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando en términos económicos el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, así debe ser regulada en orden a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida y no para tratar de borrar lo imborrable.

De otra parte, señala que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, en consecuencia, el juez habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades, entonces con prescindencia del patrimonio del obligado al pago.

En subsidio de las excepciones de reparación y prescripción además, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En este punto refiere que se debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría que un daño sea indemnizado dos veces, lo que no es jurídicamente procedente.

En un último acápite, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los primeros sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca esa obligación y además, desde que dicha sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, pues antes no existe ninguna obligación para su representado de indemnizar ni suma, en consecuencia, que reajustar.

En lo que toca a los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, de acogerse la demanda, tales reajustes e intereses sólo podrán



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Por todo lo expuesto, solicita tener por opuestas a la demanda las excepciones perentorias de reparación integral-pago y de prescripción extintiva de la acción, y en su mérito rechazar la demanda en todas sus partes.

Con fecha 2 de marzo de 2022 se tuvo por contestada la demanda y se dio traslado a la réplica, el que fue evacuado con fecha 9 de marzo de 2022.

En dicha oportunidad el demandante en primer lugar, reitera los fundamentos de hecho y de derecho invocados en el libelo indemnizatorio impetrado en contra del Fisco de Chile.

Posteriormente, se hace cargo de excepciones, defensas y alegaciones que podría oponer la demandada, las que identifica como excepción de reparación integral; prescripción extintiva; en cuanto al daño e indemnización; y respecto a la improcedencia del pago de reajustes e intereses.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva o integral alegada por el Consejo de Defensa del Estado, en razón de los beneficios de las Leyes 19.234 y 19.992 y sus modificaciones posteriores, sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990; ello en ningún caso repara íntegramente el dolor experimentado por el demandante en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Por ello, nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería un crédito líquido y actualmente exigible. Con todo, le parece razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima directa en el demandante. Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, y ello extinguiría la prescripción invocada.

Explica que el Fisco de Chile vuelta su empeño interpretativo para sostener dicha defensa, señalando que en la discusión de la Ley N° 19.123, el objetivo de este tipo de normas quedó bastante claro la idea de reparación moral y patrimonial, y que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y de reparación. Así, el demandado esgrime como justificación para alegar que el daño moral ya está resarcido, el artículo 2 de la ley antes citada, la que tiene por objetivo “Promover la reparación del daño moral de las víctimas”. Para el demandante, promover no sería sinónimo de reparar, y en particular, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta el día de hoy, por las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

brutales torturas proferidas por agentes del Estado; y por cuanto dicha ley no considera incompatible la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios según el tenor inequívoco del artículo 24.

Señala que ello ha sido entendido por los tribunales superiores de justicia en forma reiterada, como en lo sentenciado en la causa “Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile”, que confirmaría la compatibilidad entre una indemnización en conjunto con la reparación de los informes Rettig y Valech; junto con la jurisprudencia emanada de las diferentes Cortes de Apelaciones, que cita al efecto.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, indica que es jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas para regular la responsabilidad del Estado son aquellas del Código Civil, por cuanto la jurisprudencia invocada apunta a la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional. Debe tenerse presente además que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la doctrina de los actos propios, así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil.

En dicho orden de ideas, agrega que la doctrina de los actos propios consiste en castigar como inadmisibles toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión, según la doctrina y jurisprudencia que cita, y que pese a ello, el demandado insiste en que el caso de autos estaría prescrito, lo que no sería efectivo según las razones que indica:

- La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción, en virtud del artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República.

- El demandado no reconoce la pertinencia de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos, conforme a la jurisprudencia emanada de las Cortes internacionales.

Así, sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

Plantea que sin duda la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento, pero integrar la ausencia normativa mediante aplicación de normas del Código Civil resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre derecho público y privado, como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de estos estatutos regula.

En consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de derechos humanos debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto.

En cuanto al derecho aplicable, existe un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable, pero que independientemente de lo citado por la demandante o por el demandado, ambos llevan a la conclusión de la existencia de esta responsabilidad por hechos que causan daño y que en los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar.

En relación a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, indica que la más reciente jurisprudencia ha variado el criterio que argumenta el demandado, otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorio contra los Derechos Humanos, concediendo la correspondiente indemnización.

Finalmente, en cuanto al monto demandado, indica que no hay dinero que supla el dolor experimentado por el demandante, y que resulta complejo tener que justificar lo solicitado, y que en razón de ello si se estima excesivo, se ha solicitado al Tribunal determinar la suma a disponer.

Con fecha 31 de marzo de 2022 el demandado evacuó la réplica, reiterando los argumentos ya esgrimidos en la contestación de la demanda.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

Con fecha 27 de abril de 2022, se recibió a prueba la causa, rindiéndose la prueba que consta en autos.

Con fecha 14 de marzo de 2023 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, compareció don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, en representación de doña Ximena George-Nascimento Lara, e interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, a fin que de que se indemnice a su representado por los perjuicios causados por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones, condenándosele a pagar la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, más reajustes, intereses y costas.

Lo anterior, por los fundamentos de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, compareció el Fisco de Chile oponiendo las excepciones de reparación integral y prescripción de la acción, y en su mérito rechazar la demanda por los argumentos ya reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

TERCERO: Que, el demandante sustenta su pretensión indemnizatoria en el hecho de ser víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de su persona, producto de la detención y tortura a la que fue sometido por agentes del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones.

Especifica claramente la fecha de su detención, privación de libertad y las torturas recibidas, como también las secuelas físicas y psicológicas que afirma han permanecido hasta la fecha.

CUARTO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, toca al actor acreditar los supuestos de hecho en que afina su acción.

QUINTO: Que, a objeto de acreditar sus asertos, el demandante acompañó la siguiente prueba instrumental, que no fuera objeto de objeción contraria o en su caso, cuya objeción ya fuera desestimada:

1.- Certificado de nacimiento de Ximena George-Nascimento Lara, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 4 de noviembre de 2021.

2.- Certificado de fecha 2 de noviembre de 2020, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre calificación como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados a doña Ximena George-Nascimento Lara y nómina adjunta.

3.- Copia de carpeta con los antecedentes sobre la calificación de víctima de doña Ximena George-Nascimento Lara, reconocido por la Comisión Nacional



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXGCFXVK

«RIT»

Foja: 1

sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, emitido por el Instituto de Derechos Humanos (INDH).

4.- Copia de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol N° de ingreso N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre del año 2015.

5.- Copia de la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018.

6.- Copia de la Sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018.

7.- Copia de Informe Médico, suscrito por la Dra. Cirujana Jasna Radich, del Equipo de Cirugía de Tórax, del Hospital Barros Luco.

8.- Copia de Informe Médico, suscrito por la Dra. Rosita Aguirre Morey, Médico Psiquiatra, de fecha 10 de septiembre de 2022.

SEXTO: Que igualmente el demandante provocó la prueba testimonial recibida en audiencia de 9 de diciembre de 2022, en la que comparecieron doña Elsa Rudolphy Romani y don Pedro Alejandro Matta Lemoine, y en la audiencia de 10 de febrero de 2023, en la que compareció doña Jasna Alejandra Radich Radich, todos quienes juramentados, y legalmente examinados, declararon al tenor de los puntos de prueba fijados en autos.

SEPTIMO: Que, la demandada por su parte solicitó se oficiara al Instituto de Previsión Social a fin de que informe sobre todos los beneficios en dinero y pensiones vitalicias recibidas por los demandantes a través de las leyes de reparación.

A folio 13 consta informe Oficio DSGT N° 4792-5884 del 16 de marzo de 2022 emitido por el Jefe Departamento Secretaría General y Transparencia Instituto de Previsión Social, que detalla beneficios de reparación Leyes N°s 19.992 y 20.874, recibidos por doña Ximena George-Nascimento Lara en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech). Dicho documento consigna la siguiente información, beneficios del período de febrero de 2005 a febrero de 2022, por concepto de Pensión Ley N°19.992 la suma de \$ 33.717.208.-, por concepto Aporte Único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000.-, aguinaldos la suma de \$562.653.- total a la fecha \$ 35.279.861.- con una pensión actual Valech de \$237.796.-

OCTAVO: Que apreciando la prueba producida en autos en forma legal, aplicando a la instrumental rendida lo prescrito en los artículos 342, 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil en relación con lo estatuido en los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, y del tenor de la prueba testimonial rendida en autos, ha de tenerse por acreditado que el actor fue víctima de apremios ilegítimos y torturas, lo que se tradujo en los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

forma expuesta en su libelo con motivo de su detención por agentes del Estado de Chile, ocurrido el año 1973.

Es posible constatar también que el actor ha sido beneficiario en distintas capacidades, pensión de las leyes N°19.234 y N°20.134, bono Ley N°19.992, del aporte único de la Ley N° 20.874, junto con aguinaldos, con una pensión actual \$207.774.

Dichos montos obedecen a reparaciones a personas exoneradas por motivos políticos y a los titulares individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

NOVENO: Que, la primera defensa planteada por el Fisco de Chile dice relación con la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor al amparo de los beneficios previstos en las textos normativos precitados, ya sea en transferencias directas de dinero, asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante un conjunto de reparaciones simbólicas que menciona.

DECIMO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 19.992 establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez el artículo 2° prescribe que la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años y a \$1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N°2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición.

La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con aquellas otorgadas en las Leyes N°19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

Por su parte el artículo 4° de la indicada ley señala que la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869, de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

A su vez, la Ley N°19.234 estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos (abono de tiempo por gracia, pensión con transacción extrajudicial y pensión no contributiva, última de carácter vitalicio, que otorga el Presidente de la República, a aquellos exonerados políticos que cumplan con los requisitos para ello).

UNDÉCIMO: Que, el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech.

De las normas legales recientemente relacionadas es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social y no una indemnización del daño moral para reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En efecto, no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios físicos ilegítimos, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, optando el actor por la pensión otorgada en la Ley N°19.992 que como puede inferirse de la lectura del detalle de beneficios que recibe.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, no procede imputar a la indemnización debida al demandante las cantidades que en calidad de beneficiario de las reparaciones y pensiones haya recibido ya en su respectiva calidad de preso político o como exonerado político, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación integral.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

DÉCIMO TERCERO: Que, enseguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el Fisco demandado en su escrito de contestación.

En primer término, cabe señalar que tratándose de violaciones a los derechos humanos –cúal es la calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo séptimo del fallo –el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

DÉCIMO CUARTO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos por la parte demandante como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual –vinculada a un negocio común –o extracontractual, sino configurativas de un delito de lesa humanidad del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario. Y es de esta clase en razón de que la pretensión del actor se fundamenta en las torturas de que fue víctima, en completa indefensión, por agentes del Estado que disponían de gran poder de coerción.

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad a aquel que sirven de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

Asimismo, se ha constatado que la demandante aparece incorporada en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech II, reconocido como víctima de prisión política y tortura; en tal carácter, en lo tocante a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los convenios o tratados internacionales, las reglas de Derecho Internacional que se consideran *ius cogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “*el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales*” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario



de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231).

DÉCIMO SEXTO: Que, la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5° de la Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”* y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido reclamada en estos autos.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que le haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política.

DÉCIMO OCTAVO: Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de Derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la



«RIT»

Foja: 1

Constitución sino también por los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

DÉCIMO NOVENO: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 señala que las reglas de prescripción *“se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”*, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al Derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

VIGESIMO: Que, en el mismo sentido el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó –que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie, la de establecer responsabilidades –incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXGCFXVK

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso 3° del artículo 6° de la Constitución Política de la República y del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que de aceptarse la tesis del Fisco demandado quedarían inaplicadas.

Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en síntesis, tratándose la tortura de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un



«RIT»

Foja: 1

tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.

Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

Como puntualiza el profesor Diez Schwerter, “El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona, pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (DIEZ Schwerter, José Luis. “El daño extracontratual”. Editorial Jurídica de Chile, pág. 88.).

VIGÉSIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, además de la prueba rendida por el actor, como el tenor de lo relatado en la prueba testimonial, la existencia del daño moral en el caso de marras puede presumirse de los hechos asentados en la causa atendida la gravedad del hecho ilícito y las circunstancias en que los hechos acontecieron y sus consecuencias, con motivo del dolor y angustia tanto físicas como psicológicas que experimentó el actor con motivo de su detención y torturas, experiencia traumática que sin duda produjo un efecto psicológico como fenómeno natural tras haber sido víctima de dichos actos contra su persona y que justifican la indemnización por daño moral.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en la determinación del *quantum* de la indemnización no se considerarán los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos noveno a undécimo que preceden; por ende, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello la innecesaria, irracional y violenta ocurrencia de los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK

«RIT»

Foja: 1

sucesos relatados y sus perniciosas consecuencias. Por estas razones se fija la indemnización solicitada en la suma de \$ 90.000.000 - (noventa millones de pesos).

VIGÉSIMO SEPTIMO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido se le eximirá, en definitiva, del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170 y 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil; 5° y 6° de la Constitución Política de la República; 3° de la Ley N° 18.575 y demás pertinentes, se resuelve:

I.-Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar a doña Ximena George-Nascimento Lara, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$ 90.000.000.- (noventa millones de pesos), con los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo sexto que precede.

II.- Que no se condena en costas al Fisco al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 9136-2021

Pronunciada por doña Paulina Sánchez Campos, Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, catorce de Julio de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QYNBXCFCXVK